



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE: JOSE IVAN HINCAPIÉ PANESSO Y OTROS.
DEMANDADO: METRO DE MEDELLÍN LTDA.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO.
DECISIÓN: CONFIRMA.

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados, Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, procede a resolver el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de los demandantes, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por los Señores, **JOSÉ IVAN HINCAPIÉ PANESSO, VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LUIS NEVARDO CORREA ÁLVAREZ, RICARDO BARRENECHE MONSALVE, ALBEIRO DE JESÚS CASTRO VÁSQUEZ, JULIO CESAR VÉLEZ ARANGO, CARLOS MARIO MORA OSORIO, MAURICIO SANÍN BURGOS, GONZALO LIZARRALDE BONILLA Y JORGE HORACIO GUTIÉRREZ FRANCO**, en contra de la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA -METRO DE MEDELLÍN LTDA.-**

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA.

DEMANDADA.

Dice que la Ley 344 de 1996 permite que los empleados que se encontraban en el régimen retroactivo de cesantías, voluntariamente se acojan al nuevo régimen de liquidación de estas, sin que la Sentencia C-428 de 1997, prohibiera a los empleadores ofrecer incentivos para que sus servidores se afiliaran al nuevo régimen, por lo que la demandada, en el año 2004, ofreció a sus servidores una bonificación por trasladarse de régimen; sin que, en ninguno de los demandantes existiera vicio en el consentimiento, y sin que se negociara un derecho irrenunciable. Y finaliza expresando que los

demandantes reclamaron 13 años después de la suscripción de tal acuerdo, encontrándose la acción prescrita.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

- Condenar a la demandada a pagar a los demandantes las cesantías, la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T. por el no pago oportuno de tal prestación, y la indexación de la condena.

HECHOS:

- Que los demandantes se encuentran vinculados con la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido, en calidad de trabajadores oficiales, y adscritos al Sindicato de trabajadores de la demandada –detallan cargo, fecha de inicio y salario de cada uno-.
- Que en el año 2004 la demandada sin socializar las consecuencias legales, presionó a los trabajadores, conduciéndolos a cambiarse del régimen de cesantías retroactivas al régimen de cesantías anualizadas, ofreciéndoles una bonificación como incentivo, amenazándolos con el despido y cambio de condiciones laborales, viciando la libre voluntad de estos; viéndose los mismos obligados a presentar un acta en la que informaban que voluntariamente se acogían al cambio de régimen.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Declaró prósperas las Excepciones de falta de causa para pedir y saneamiento de la nulidad relativa. Absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda; y Condenó en Costas Procesales a los demandantes.

Dijo la A quo que se debe descartar la ineficacia del acto por ilegalidad de la bonificación ofrecida por la demandada para incentivar el cambio de régimen de cesantías, ya que esta no estaba imposibilitada para ofrecer tal incentivo, al ser una Sociedad limitada que se rige por las condiciones de las E.I.C.E. que son similares a las del derecho privado. Y que no hay lugar a la rescisión del acto por vicio en el consentimiento, toda vez que el traslado de régimen se dio en el año 2004, por lo que para los años 2016 y 2017 cuando se presentaron las reclamaciones, el plazo de 4 años para rescindir ya se había cumplido, saneándose la nulidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Competencia:** Consulta. Artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S. “Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas”.
- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no válido el cambio de régimen de liquidación de las cesantías, efectuado por los demandantes. Veamos:

La aquí demandada es una Sociedad de economía mixta, según se desprende del Certificado de Existencia y Representación Legal de fls. 273 a 285 –archivo 01, Primera Instancia-, por lo que el régimen aplicable a los demandantes, es el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, según lo dispuesto en el párrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, reglamentado por el Decreto 180 de 2008.

No discuten las Partes la existencia del vínculo laboral a término indefinido pactado entre las mismas, lo cual cuenta con respaldo probatorio en el Proceso, pues a folios 51 a 56, 63 a 76, 120 a 124, 132 a 136, 146 a 150, 204 a 208, 216 a 220, 227 a 231, 239 a 246, y 252 a 256, obra copia de los contratos de trabajo de cada uno de los demandantes; y a folios 38, 39, 41 a 43 y 45 a 49 ibídem, se aportaron las Constancias laborales expedidas por la Jefe del Área de Gestión del Talento Humano de la demandada, en las que se detalla la fecha de ingreso, el cargo y el salario devengado por cada uno de ellos.

RÉGIMEN DE CESANTÍAS.

El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público”, para lo que interesa al caso objeto de debate, establece:

“Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral...

El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el momento de la publicación de la presente Ley tengan régimen de cesantías con retroactividad, se acojan a lo dispuesto en el presente artículo.

Este último inciso –subrayado-, en el cual la Parte demandante fundamenta sus pretensiones, al considerar que la demandada no podía ofrecer a los trabajadores un incentivo para propiciar el cambio de régimen de cesantías, fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 1997, considerando que le

“corresponde al Congreso de la República de manera exclusiva establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración (art. 150, numeral 11, C.P.)”, sin que el Ejecutivo -Gobierno Nacional- pueda ejercer una “función indudablemente legislativa”.

Sobre el objeto de debate, la C.S. de Justicia Sala de Cas. Laboral en la SL 2241 del 28 de abril de 2021, Radicación N° 72983, M.P: Iván Mauricio Lenis Gómez –referida por la juez de instancia-, en un Proceso de idénticas características al que es objeto de debate, incluso en contra de la misma empleadora aquí demandada, expuso:

“El sistema retroactivo de las cesantías se incorporó para el caso de los servidores públicos -entre ellos trabajadores oficiales-, a través del artículo 1.º de la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. No obstante, la expedición del Decreto 3135 de 1968 buscó reemplazar dicho régimen e instituir la liquidación anual de la referida prestación social, lo cual solo se vino a consolidar para los trabajadores del sector oficial por medio de la Ley 344 de 1996.

Al respecto, en la sentencia CSJ SL17487-2015 la Corporación señaló que a partir de la vigencia del Decreto 3118 de 1968 se procedió en el sector público al desmonte del sistema de liquidación retroactiva del auxilio de cesantía y a la instauración o consolidación de la liquidación anualizada de las mismas. Así, para el 2004, fecha en que el recurrente aceptó el cambio de régimen que le ofreció su empleador, estaba previsto en nuestro ordenamiento jurídico el sistema de liquidación anual de las cesantías en el sector oficial, normativa que constituye el mínimo de derechos y garantías consagrado en favor de los servidores públicos en cuanto a tal prestación...

La Sala estima que la interpretación que realizó el *ad quem* respecto del entendimiento de la sentencia CC C-428-1997 no es contraria al ordenamiento jurídico y, por el contrario es acertada, pues en efecto, la Corte Constitucional consideró que la norma referida era inexecutable porque le permitía al Gobierno ejercer, sin límite alguno, tanto desde el punto de vista material como desde el temporal, una potestad reservada al legislador, cual es la de fijar los gastos de la administración, cuando ello es una función propia del órgano legislativo.

Pero lo anterior ninguna incidencia tiene en lo que ocurrió en este asunto, en el que las partes acordaron en el marco de una relación laboral subordinada entre un trabajador oficial y una empresa industrial y comercial del Estado, el traslado de régimen de cesantías a cambio de un incentivo económico, además que tal pacto no afectó los derechos adquiridos, mínimos o irrenunciables del trabajador pues solo versó sobre las cesantías futuras -según no se discute en casación- que, por no haberse causado, constituían una simple expectativa susceptible de negociación.

Además, es dable señalar que si bien el nuevo régimen de cesantías anualizado solo aplicaría para las relaciones laborales que nacieran con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, tal y como lo ha precisado la Sala (CSJ SL17487-2015) - que no era el caso del actor pues quedó establecido el vínculo contractual inició el 1.º de diciembre de 1995-, nada se opone a que el trabajador manifieste su voluntad libre y consciente de beneficiarse del nuevo régimen anualizado de liquidación de cesantía. Menos aún, se reitera, cuando en este caso no se afectaron los derechos causados hasta la celebración del acto, no se alteró el derecho mínimo a que tal prestación se calcule conforme a la norma vigente y por su suscripción recibió un incentivo económico”. (Subraya y resalto propio)

Este último criterio –manifestación de voluntad libre de acogerse al nuevo régimen de cesantía- fue reiterado en la SL3407 del 27 de julio de 2021, Radicación N.º 85043, M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota, en la que se replicó lo expuesto en la SL 2731 del 11 de marzo de 2015, Radicación N.º 37022, M.P: Rigoberto Echeverri Bueno. En ella se manifestó:

“En este punto resulta oportuno recordar que la jurisprudencia desarrollada por la Sala en torno al tema ha sido consistente en sostener que la manifestación de la voluntad del trabajador de acogerse al régimen de cesantía «...*no requiere de formas o palabras sacramentales...*», pues basta con que conste por escrito y de ella pueda derivarse la intención libre del trabajador. Al respecto pueden verse las sentencias CSJ SL 6 sep. 1999, rad. 11909, CSJ SL 23 ag. 2000, rad. 14270, CSJ SL 19 may. 2005, rad. 25755, entre otras. (subraya la Sala).

Por otra parte, esa intención libre y voluntaria del trabajador de acogerse al nuevo régimen de cesantías, plasmada por escrito, resultaba coherente con el hecho de que, como lo resaltó el Tribunal, a partir de allí mantuvo una conducta consecuente con el cambio de régimen, pues tenía pleno conocimiento del Fondo en el que se estaba consignando su cesantía y solicitaba retiros parciales de la misma...”.

De lo anterior, se infiere que con la expedición de la Ley 344 de 1996, fue el legislador quien en virtud de la facultad legal y constitucional que tiene para ello, decidió cambiar el régimen de cesantías de los servidores públicos –entre ellos el de los trabajadores oficiales demandantes-; sin que exista norma que prohíba a los empleadores, ofrecer u otorgar beneficios a sus trabajadores con la finalidad de propiciar que estos decidan en forma libre y voluntaria, acogerse al nuevo régimen de cesantías.

Ahora, por **consentimiento**, el cual según el artículo 1502 del estatuto civil constituye un elemento esencial de todo acto jurídico y se exige para que una persona se obligue con otra, se entiende la manifestación de la voluntad personal del agente para celebrar un acto jurídico; pudiéndose inferir de los artículos 1508 y ss del mismo estatuto, que éste debe estar libre de todo vicio, es decir, de error, fuerza o dolo, ya que su incidencia comprobada genera la nulidad del acto jurídico.

Al respecto, la citada Corporación en Sentencia del 4 de febrero de 2003, Radicado 19812, M.P. Germán Valdés Sánchez, expresó:

“En todo caso debe afirmarse que el error, la fuerza y el dolo, no surgen en abstracto sino que deben provenir de hechos que de manera clara afecten el consentimiento de modo que, de no existir ellos, la declaración de voluntad no se habría emitido. Pero la simple lectura de unos documentos, en la circunstancia de que efectivamente el demandante los hubiera leído, dista mucho de ser un medio que induzca al error o que constituya violencia sobre el sujeto o que represente una maquinación engañosa de tal naturaleza que impida conocer el acto que se está celebrando.”

En el caso de autos, a folios 57, 80, 125, 137, 151, 209, 221, 232, 247 y 257 militan las comunicaciones dirigidas a la demandada, firmadas por cada uno de los demandantes, en las que manifestaron a la primera, que han decidido de forma libre, voluntaria, espontánea y sin presiones, cambiarse del régimen de cesantías con retroactividad al régimen anualizado; aportándose a folios 58, 82, 126, 139, 153, 210, 222, 233, 248 y 258 los formatos para pago único de cesantías, en los que nuevamente, cada trabajador reiteró su decisión libre y voluntaria de recibir el pago de las cesantías acumuladas al año 2004; y a folios 60, 85, 128, 142, 156, 212, 224, 235, 249 y 260 obra copia de los formatos para pago de la bonificación por cambio de régimen de cesantías propuesto por la empresa, la

cual, según los comprobantes de nómina de folios 61, 87, 130, 144, 158, 214, 225, 237, 250, y 261, le fue pagada a cada uno de los demandantes; y a folios 59, 84, 127, 141, 155, 211, 223, 234 y 259, se anexaron los formularios de solicitud de afiliación al Fondo de cesantías elegido por cada uno de ellos.

Una vez analizada la prueba documental obrante al Proceso, encuentra la Sala que si bien el acto jurídico de cambio de régimen de cesantías fue iniciado y estuvo motivado por el empleador demandado, en virtud del ofrecimiento que hizo a cada uno de los demandantes de pagarle una bonificación en caso de aceptar tal cambio –lo cual no está prohibido en la ley-, lo cierto es que este fue acogido por los demandantes en forma libre y voluntaria; sin que se haya aportado prueba alguna en el Proceso de que éstos hayan sido presionados a cambiarse del régimen de retroactividad de cesantías al régimen anualizado, lo cual no pasó de ser una afirmación sin soporte probatorio alguno.

Aunado a lo anterior, ha considerado esta Sala en varias oportunidades que si bien el temor de perder el empleo o al cambio de las condiciones laborales –como se alude en el referido hecho segundo-, es entendible; dicho tipo de temor, por sí solo no constituye uno de la entidad requerida por la ley para viciar el consentimiento, ya que debe tratarse de un acto que infunda en el trabajador un justo temor de verse expuesto a un mal irreparable y grave; lo que no se probó dentro del presente Proceso, pues los demandantes ni siquiera aportaron prueba testimonial alguna que permitiera controvertir la prueba documental por ellos mismos aportada.

Y adicional a ello, los demandantes no solo manifestaron por escrito su intención de cambiar el régimen de cesantías en el año 2004, sino que además, en tal momento seleccionaron la Administradora a la cual deseaban pertenecer –pública o privada-, conociendo desde entonces la entidad en la que anualmente se les consignaría tal prestación; manifestando su inconformidad solo en el año 2016, esto es, más de 11 años después de materializado el traslado, según se desprende de las comunicaciones expedidas por la Jefe de Gestión del Talento Humano –fls. 50, 62, 119, 131, 145, 203, 215, 226, 238 y 251- en respuesta a las reclamaciones administrativas presentadas por aquéllos.

Consecuente con lo anterior se **CONFIRMARÁ** la sentencia de Instancia.

Sin Costas Procesales en esta instancia al conocerse del proceso en virtud del Grado Jurisdiccional de Consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


DECIDE:


PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el **Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín** el 12 de octubre de 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por los Señores **JOSÉ IVAN HINCAPIÉ PANESSO, VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LUIS NEVARDO CORREA ÁLVAREZ, RICARDO BARRENECHE MONSALVE, ALBEIRO DE JESÚS CASTRO VÁSQUEZ, JULIO CESAR VÉLEZ ARANGO, CARLOS MARIO MORA OSORIO, MAURICIO SANÍN BURGOS, GONZALO LIZARRALDE BONILLA Y JORGE HORACIO GUTIÉRREZ FRANCO**, en contra de la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA -METRO DE MEDELLÍN LTDA.-**, según las consideraciones de esta Sentencia.

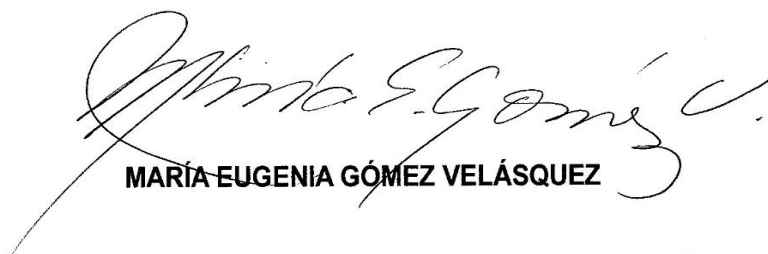
SEGUNDO: Sin Costas Procesales en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO** y se firma en constancia.

Los Magistrados,


NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ